

“El derecho internacional de los derechos humanos”

*Juan Méndez
Director Ejecutivo IIDH (1996-1999),
11 de octubre, 1999*

Me voy a permitir hablar en términos generales de esto que llamamos derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, cuando usamos esta expresión, pensamos en una especie de cuerpo doctrinal de instrumentos que empiezan con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero ese cuerpo incluye una variedad de otros instrumentos, que perfeccionan, ejemplifican y dan sentido concreto a las normas contenidas en la Declaración Universal. Me refiero a pactos internacionales de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales, pero también a las convenciones regionales, que son tratados, y a otros que no lo son; declaraciones, por ejemplo, que también integran este cuerpo doctrinal.

Quiero destacar que, aunque convencionalmente, todos reconocemos que la existencia de un derecho internacional de los derechos humanos se remonta a los años siguientes a 1945, después de la II Guerra Mundial; pero esto no quiere decir que nuestra disciplina no tenga antecedentes.

Los antecedentes ideológicos o doctrinales se remontan a por lo menos un par de siglos. No hay ninguna duda de que nuestra doctrina tiene estrecho parentesco con las ideas liberales o las ideas del iluminismo, pero no se agota allí ni tampoco resulta que ese parentesco determina su contenido en forma definitiva. Por el contrario: insistimos en que nuestra disciplina se construye con el aporte de todas las culturas, de todas las experiencias, y es preciso que nadie llegue a los derechos humanos teniendo que abandonar sus tradiciones, sus culturas, a no ser que estas sean contradictorias con la dignidad humana. No cabe duda de que no todas las culturas son saludables, decentes, respetuosas de la dignidad de la persona; tampoco lo es la nuestra y lo que debemos de hacer es separar la paja del trigo y rescatar de cada cultura aquello que aporte, desde una identidad cultural determinada, a la riqueza de contenido de nuestra doctrina.

En ese sentido es que hablamos de universalidad de derechos humanos y no en el sentido de una norma que ya hemos decretado como universal y que, por lo tanto, es aplicable a todos sin que hayan tenido siquiera la oportunidad de discutirla. Por eso es que nuestra disciplina, nuestro derecho internacional de los derechos humanos, es una disciplina en perpetua evolución, crecimiento y enriquecimiento con el aporte de todos.

Además de los doctrinales, hay antecedentes jurídicos que sustentan esta concepción de que hay derechos de la persona humana que son anteriores y exigibles ante el Estado, los cuales se remontan también a un par de siglos atrás. Es la noción de la limitación del poder del Estado a favor de un ámbito de autonomía de la voluntad de la persona humana. Esto se consagró primero en normas constitucionales y legales que tenían precisamente ese objetivo y luego, después de la II Guerra Mundial, empieza a plasmarse en un cuerpo de doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. También existieron, a nivel de derecho internacional, antecedentes, si se quiere mucho menos particularizados y tal vez algo remotos, pero en el derecho de gentes,

como se llamaba antes al derecho internacional, siempre existieron algunas normas que demuestran que el individuo, la persona humana, era sujeto de derecho y de obligaciones en algunos casos. Por ejemplo, las normas sobre relaciones consulares; las normas de representación por parte del Estado de un nacional que puede estar viviendo o residiendo provisoriamente en el extranjero; las normas sobre piratería que estaban dirigidas directamente a una persona considerada enemiga de la humanidad.

Después de 1945 se sistematiza todo esto y, por primera vez, se construyen instrumentos que están destinados específicamente, no a la protección del Estado, o a la protección de las relaciones entre los Estados, sino a la protección de la persona contra el abuso del poder. Eso sí es novedoso y ha habido, en 50 años, un desarrollo realmente increíble en cuanto a contenidos y a la descripción de en qué medida podemos actuar en la limitación del poder del Estado.

Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos tanto de normas de derecho interno como de derecho internacional y, aunque me estoy concentrando en los aspectos de derecho internacional de los derechos humanos, tenemos que recordar que estas normas se complementan unas con otras. Las que se aplican en el derecho interno como resultado de las obligaciones contraídas por el Estado, o bien por tradiciones jurídicas anteriores, forman también el cuerpo normativo de la protección de la persona frente al Estado.

Por lo tanto, como dice Pedro Nikken, el Presidente del Instituto, no deberíamos hablar tanto de derecho internacional de derechos humanos y de derecho constitucional o derecho interno de los derechos humanos, porque todo integra una sola disciplina que tiene aspectos de derecho internacional y aspectos de derecho interno y que, apropiadamente, debemos llamarle derecho de los derechos humanos de manera que lo incluya todo.

Me parece muy importante tener en cuenta que hay una jerarquía normativa y que hay cosas que se pueden exigir de los Estados, pero otras que dependen de en qué circunstancias, de qué Estado y bajo qué condiciones.

Existen unas normas que se llaman *jus cogens*; esta no es una expresión muy usada en las facultades de derecho latinoamericanas, pero sí es reconocida por nuestros Estados. *Jus cogens* son unas normas imperativas de derecho internacional emanadas de la costumbre, pero que van más allá de la costumbre internacional como creadora de derechos, porque son imperativas. Esto en el sentido de que se puede exigir su cumplimiento bajo cualquier circunstancia, en cualquier Estado. Este es un núcleo bastante reducido de normas fundamentalísimas, por ejemplo la previsión de la tortura. Hay un acuerdo unánime en toda la doctrina y en las culturas jurídicas, sobre que la tortura está prohibida y no hay forma de apartarse de esa prohibición en forma racional y jurídicamente válida. Esta es, entonces, una categoría especial de la costumbre como generadora de derecho.

Hay una segunda categoría más amplia, que incluye las normas de *jus cogens*, que es la costumbre o norma de derecho internacional consuetudinario. Desde siempre, se reconoce que la costumbre es fuente de derecho, pero no es solamente una fuente remota que después se plasma en la ley, en el tratado. La costumbre de la que hablamos en derecho internacional es muy particular

ya que es la práctica, a lo largo de generaciones, por parte de las naciones; es decir que debe ser la práctica estatal la que determine la costumbre. Dentro de eso hay ciertas normas que no alcanzan la categoría de *jus cogens*, pero que, de todas maneras, se pueden invocar contra ciertos Estados.

La diferencia es que las normas de *jus cogens* no pueden ser derogadas por un acto de voluntad posterior del Estado, porque el *jus cogens* es imperativo.

En cambio una norma de derecho consuetudinario puede ser derogada, e incluso puede ser no reconocida. De modo que hay que distinguir entre una y otra.

En una tercera categoría se encuentran los tratados, que son obligaciones solemnes que los Estados contraen y que están regidos por una serie de normas, también originariamente de costumbre, pero ahora plasmadas en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. A falta de normas más explícitas, se aplica subsidiariamente para interpretar los tratados así como el procedimiento para acceder a los mismos. Esto se refiere, por ejemplo, al procedimiento de ratificación, o de denuncia al tratado y también a las obligaciones que empiezan a existir incluso en el momento en el que un Estado firma pero no ratifica un tratado.

Cuando los tratados incluyen normas de derechos humanos, el Estado no puede escapar a sus obligaciones y el resto de la comunidad internacional tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento, aun cuando la obligación o el derecho invocado sea entre el Estado y un nacional, es decir aunque la relación concreta esté dominada por el principio de soberanía territorial o nacional. Si el Estado asume ciertas obligaciones ante el resto de la comunidad internacional, no puede luego reservar para sí un espacio de soberanía tan amplio que anule por completo esas obligaciones.

Una cuarta categoría es la de las declaraciones, como la Declaración Universal, o la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; estas son fuentes de derecho solamente en cuanto alguna de sus normas consagre o declare la existencia de una norma consuetudinaria. De lo contrario, no alcanzan el mismo nivel que un tratado ya que hay un diferente nivel de obligación y de compromiso en cuanto a su cumplimiento

De todas maneras, las declaraciones son muy útiles y algunas de ellas han adquirido un rango especial, ya sea porque efectivamente muchas de sus normas son consuetudinarias o porque han sido incorporadas a otras normas que sí son tratados. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una Opinión Consultiva, señaló que como la Declaración Americana había sido incorporada a la Carta de la OEA, y esta es indudablemente un tratado, la declaración había adquirido *status* de obligación internacional. Esto lo disputan, por supuesto, algunos Estados de nuestro continente, que sostienen que ellos han firmado la Declaración, pero no con el ánimo de contraer obligaciones internacionales.

Por último, hay varios instrumentos que ni siquiera son declaraciones, en el sentido de que han sido firmadas por representantes de los Estados. Esto es una gran variedad de informes, votos en comisiones especiales de Naciones Unidas o de OEA, que son *opinio juris* en el mejor sentido de la palabra, porque

van creando el ambiente para redactar, eventualmente, una norma obligatoria o que van explicitándola y especificándola.

Por lo tanto, son buenos auxiliares de interpretación pero, de por sí, no constituyen derecho en el sentido de obligatoriedad. Sin embargo, muchas de estas normas son importantes porque a lo largo de la práctica y de los años, los Estados las reconocen, las citan y de ese modo estos instrumentos se convierten en interpretaciones muy autorizadas de otras normas que sí son obligatorias.

No quiero dejar esta breve jerarquización de normas sin decir que, a veces, hablamos de principios emergentes. Estos surgen de una norma obligatoria, a veces de la sentencia de un cuerpo como la Corte Interamericana; a veces de la opinión de un jurista respetado y prestigioso. Si no hay contradicción, si no hay una corriente de opinión contraria, se va gestando así una forma de interpretar ciertas normas que, eventualmente, se harán obligatorias. Mientras tanto, son principios emergentes, no como una obligación exigible al Estado, pero sí como una forma racional y correcta de aplicar ciertos principios que sí son obligatorios.

Todo lo que se habla del derecho a la verdad y el derecho a la justicia tiene esta categoría de principio emergente.

Esta jerarquización es útil para ver hasta qué punto estas diferencias tienen efectos jurídicos.

Hay varias formas de incorporación del derecho internacional al derecho interno y esta obligación se sustenta en dos grandes teorías: la monista y la dualista.

La monista sostiene que el derecho internacional y el derecho interno son una misma cosa y que, una vez que un Estado ha ratificado una convención, esta es automáticamente exigible en el derecho interno. Esta es realmente la doctrina que prevalece en toda América Latina.

La teoría dualista es más bien una doctrina inglesa, en el sentido de que son los ingleses los que sostienen que, cuando su país firma un tratado, se obliga ante la comunidad internacional pero no crea derecho interno hasta que el Parlamento lo ratifique y se implemente la legislación que lo haga exigible.

La teoría monista permite la posibilidad, por lo menos teórica, de ir ante un tribunal y alegar que el gobierno acaba de ratificar y depositar el instrumento de ratificación de un tratado, y exigir acciones para cumplir las aspiraciones de una persona.

Se está avanzando, en América Latina, en darle contenido concreto a la teoría monista para que ya no sea solo una cuestión académica sino que, efectivamente, tenga resultados jurídicos concretos.

Lo más importante es recalcar que el derecho internacional, bajo ciertas condiciones, es derecho interno. Tratar el derecho internacional como derecho extranjero es no solo equivocado desde el punto de vista jurídico, sino que es realmente una expresión de ignorancia. Esto se extiende a las sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, cuando la Corte se pronuncia en un caso, lo hace para un Estado pero, como interpretación

auténtica de las normas, esto es obligatorio para todos los Estados que ratificaron la Convención.

Con respecto a las diferencias entre formas de incorporación, las nuevas Constituciones en nuestro continente han sido muy explícitas sobre el reconocimiento de los derechos humanos; no solamente se han incorporado por referencia sino que han incorporado los tratados firmados por los países, al texto constitucional. En algunos casos, incluso con ciertas normas que requieren mayorías especiales para la denuncia del tratado.

El efecto es que para derogar un tratado se necesita otro tratado o el procedimiento de denuncia que el tratado mismo establece. En cambio, en los casos de los que lo incorporan a nivel de la ley, como el caso norteamericano y el inglés, la ley posterior sí deroga la obligación del tratado. Eso no quiere decir que no subsistan obligaciones internacionales, pero a nivel de derecho interno una ley posterior puede derogarlo.

Antes de dejar este tema, quiero hablar de una obligación que está contenida en todos los tratados y que es la de respeto y garantía, por un lado, y la obligación de adecuar la legislación al contenido del tratado. Respeto y garantía están en todas las convenciones y son dos cosas distintas. Respeto implica que el Estado no puede hacer ciertas cosas que violen la obligación del tratado. La obligación de garantía implica que, si se incurre en una acción que viola un derecho fundamental de la persona, el Estado está obligado a una acción afirmativa, en el sentido de restaurar el derecho violado, de reparar el daño y de impedir la consagración de la violación. La Corte Interamericana lo ha desarrollado admirablemente y ha demostrado que la obligación de garantía se extiende a todas las obligaciones contenidas en un tratado e implica, por parte del Estado, organizar todo el aparato de su poder administrativo y judicial, para dar sentido y contenido a esta obligación de garantía. De manera que el Estado que no tenga un Poder Judicial independiente, autónomo, y que, en la práctica concreta, dé el sentido y contenido expreso a cada una de estas normas, está violando no solamente cada una de ellas, sino su obligación general de garantía.

La otra obligación es la de adecuar la legislación interna. Si esta fuera una obligación cuyo contenido lo determina por sí y ante sí el Estado, entonces no tiene ningún significado internacional; no tiene un significado de obligación ante el resto de la comunidad, ni ante sus propios ciudadanos y no tendría necesidad de estar en el tratado.

Sobre la obligatoriedad y las formas concretas de implementación, algunos piensan que el derecho internacional de los derechos humanos no es realmente derecho, que son más bien normas morales. Pero el hecho de que sea tan difícil hacer cumplir normas internacionales, no significa que no se trate de un derecho.

Por supuesto que preferiríamos que las normas concretas de cada convención y de cada tratado sean tan eficaces que no fuera necesaria ninguna forma de coacción. Pero, mientras eso no sea posible, algunos costos políticos, diplomáticos, internacionales se pagarán por violar los derechos humanos; si no inmediatamente, se pagarán en el futuro. Esto es lo que tenemos que demostrarles a los Estados: que es de su propio interés el respetar sus

obligaciones solemnemente contraídas con respecto a sus propios ciudadanos y ciudadanas.

Existen otras formas de coacción y tenemos la obligación, como movimiento de derechos humanos, de buscar las que sean compatibles con nuestros principios y con la dignidad humana; pero todas, de una manera u otra, van a ayudar a hacer realidad cada una de estas normas.

Se reconocen tres categorías de mecanismos que el derecho internacional ha creado. Unos son los no judiciales, mecanismos de protección, para distinguirlos de los de promoción. Promoción, en derecho internacional, significa gestación de nuevas normas.

Hay otras formas de tratamiento de violaciones en forma no judicial que se han abierto camino, no solamente en Naciones Unidas, sino en los sistemas regionales y que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, Relatorías Especiales que se han creado en Naciones Unidas para ciertos países, procedimiento no judicial pero que ha tenido un gran desarrollo, que tiene bastante riqueza y que ha producido, a lo largo de los años, decisiones que son reconocidas con autoridad. Yo llamo *cuasi* judicial a ese proceso porque no hay realmente una audiencia sino un intercambio de opiniones en forma pública; no hay producción de prueba, es más bien un intercambio de escritos y no hay un tratamiento judicial.

El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está previsto como *cuasi* judicial también, pero la Comisión, a lo largo de los años, lo ha formalizado; le ha dado la posibilidad de tener una audiencia; de recibir testimonio en la audiencia; de destacar a ciertos comisionados o miembros de la Comisión para ir y obtener pruebas en el territorio.

Por último están los procedimientos judiciales. El primero y más completo, el más desarrollado y ejemplar, en este momento, es el europeo. Este pasó de tener un procedimiento combinado, con una Comisión y una Corte, a un procedimiento exclusivamente judicial con un solo órgano, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al que las víctimas pueden acudir en forma directa. Este es el paradigma de la protección y deberíamos aspirar a judicializar al máximo los procedimientos.

En nuestro sistema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un procedimiento exclusivamente judicial, aun cuando tiene dos tipos de competencia: la consultiva y la contenciosa; pero aun en la primera, el procedimiento es específicamente judicial. El sistema africano, que es el tercer sistema regional que existe, tiene solo una comisión y es exclusivamente *cuasi* judicial, pero hay ya una convención impulsada por Sudáfrica para crear una Corte Africana de Derechos Humanos.

Los nuevos horizontes del movimiento de derechos humanos y especialmente de nuestra doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, cuentan con varios ejemplos.

El primero es la lucha contra la impunidad y en este sentido la contribución latinoamericana de los años 80 y 90 ha sido de una gran riqueza. Esa experiencia da contenido y sirve de ejemplo a muchos otros pueblos que tienen problemas similares y que, *mutatis mutandi*, pueden aplicarla, dándole al derecho internacional unos contenidos que no estaban previstos cuando se

dictaron las convenciones. Por ejemplo, en torno a una primera noción que es el derecho a la justicia: ante ciertas violaciones tan graves que no pueden quedar impunes porque estaríamos declarando impúdicamente nuestra decisión, no ya de no respetar a la víctima, sino de no respetar nuestro propio ordenamiento. Violaciones más graves contra ciertos derechos importantes como a la integridad física, a la vida, a la seguridad de las personas. Ante esas violaciones hay una obligación de castigar por parte del Estado y esa obligación se transforma en un derecho, el derecho que tienen las víctimas a la justicia.

Ante este tipo de delito el Estado está obligado a investigar, procesar y, eventualmente, sancionar a los responsables. Esto implica que ciertas leyes de amnistía tan amplias que impiden la investigación, el procesamiento y la sanción eventual de estos delincuentes, violan un principio, una norma internacional.

Esto no quiere decir que no haya lugar para la clemencia o para la reconciliación, aunque en nuestros países reconciliación tiene a veces sentido de mala palabra. No debemos olvidarnos que, de todas maneras, nosotros debemos de apropiarnos de la palabra y encontrar la reconciliación que está de acuerdo con la dignidad humana. Esto no es entre torturadores y torturados, pero sí puede y debe haber reconciliación entre bandos enfrentados en una lucha fratricida, sin que esa reconciliación implique que dejemos de lado las obligaciones del Estado con respecto a este derecho a la justicia.

También hay otro aspecto que es el derecho a la verdad y nunca debemos tratarlos en forma separada; el derecho a la verdad implica que mientras dure la incertidumbre sobre la suerte y paradero de desaparecidos o sobre cualquier otra violación que implique este mismo nivel de retención de la información deliberada, el Estado está obligado no solamente a decir lo que sabe, sino a averiguar lo que se debe saber y a revelarlo a la sociedad y a las víctimas. También ante este tipo de violaciones la obligación del Estado me parece que tiene otros dos componentes: uno el derecho a la reparación, que obviamente tiene que ser tal que no insulte la dignidad de la víctima, ni que implique solamente papel moneda para comprar el silencio de las víctimas, sino que signifique también formas no monetarias de reparación que reconozcan la dignidad de la persona.

Por último, el derecho que tenemos como Estado democrático a contar con cuerpos de seguridad que estén libres de las personas que cometieron estos delitos. Estas cuatro obligaciones surgen de la experiencia latinoamericana y están conformando principios emergentes en derecho internacional.

Otro nuevo horizonte es la irrupción de los particularismos que no niegan la universalidad de los derechos humanos sino que, por el contrario, la enriquecen y le dan contenidos inéditos. Esto es empezar a ver a los derechos humanos como derechos de las mujeres, de los niños, de los pueblos indígenas, sin perjuicio de que además tengan la universalidad de aplicarse a todas las personas por el hecho de ser personas.

Esto señala la superación del relativismo y la profundización de la universalidad, la cual está implícita en esta nueva forma de ver los derechos.

Esta transversalidad, especialmente de las nociones de género y de los derechos de las mujeres como derechos humanos, está influyendo de una manera decisiva en todo el progreso de la justicia penal internacional. Es notable la influencia que ha tenido el movimiento de mujeres en la forma en que los tribunales *ad hoc* para la ex Yugoslavia y para Ruanda están tratando, por primera vez, la violencia sexual como crimen de guerra, y cómo esto ya se ha consagrado en el Estatuto de Roma para la creación de un Tribunal Penal Internacional en el futuro.

Estamos en una nueva era gracias a la influencia del movimiento de mujeres de todo el mundo. También esto se expresa en las nuevas formas que estamos dando a los derechos económicos, sociales y culturales, porque ya no se trata solamente de decir que todos tenemos esos derechos, sino que sus contenidos varían según la ubicación personal y el modo de ver las cosas, según si se es hombre o mujer. Por ejemplo, ya no hablamos de derecho de los pueblos indígenas solamente, hablamos también del derecho de la mujer indígena; no hablamos solamente del derecho de los trabajadores, sino de la mujer trabajadora. No hablamos solamente de los refugiados sino también de la mujer refugiada o desplazada y de las formas más concretas en que ella vive esas violaciones.

Otro aspecto importante es que el movimiento de mujeres está alterando favorablemente toda la concepción original del derecho internacional de los derechos humanos, en la progresiva superación de la distinción absoluta entre el ámbito público y el ámbito privado. La Convención de Belem do Pará es el primer instrumento internacional de derechos humanos que efectivamente empieza a borrar esta distinción. Hasta entonces creíamos que el derecho internacional de los derechos humanos se aplicaba exclusivamente cuando la violación la cometía un agente del Estado. En la Convención para erradicar la violencia contra la mujer no se hace distinción alguna entre si la violencia la comete un agente privado o uno público. De todas maneras, el ámbito público se mantiene, porque se refiere al Estado bajo su obligación de garantía de cualquier derecho que una mujer pueda invocar, aunque el acto de violencia haya sido cometido por un agente privado, inclusive por un familiar.

Esta distinción entre el ámbito público y privado está ayudando, además, a que el movimiento internacional de derechos humanos empiece a tratar mucho más seriamente las violaciones cometidas por grupos insurgentes que, sin ninguna duda, si están organizados y luchando con un mando único, tienen obligaciones bajo el derecho internacional. Ahora el movimiento internacional de derechos humanos, en parte gracias a la influencia del movimiento de mujeres, ya no hace esta distinción que se dirige solamente contra el Estado y contra violaciones cometidas por agentes del Estado y puede ampliar, entonces, la protección.

Principales ideas del debate:

- La Convención de Belem do Pará elige a un organismo como la Comisión Interamericana de Mujeres como custodio y órgano de implementación de una Convención de Derechos Humanos.
- Esta Convención, crea por primera vez en el ámbito interamericano el procedimiento de informe por países que se aplica en el sistema universal.
- El tema de la pena de muerte es conflictivo ya que es sumamente atractivo para la población cuando se enfrentan ciertos niveles de criminalidad y es necesario que se promueva una concienciación en materia de derechos humanos hacia la población.
- La inseguridad es una amenaza muy grande para el derecho internacional de los derechos humanos y para la calidad de la democracia en nuestros países porque tiene el efecto en algunas sociedades de arrastrar a la opinión pública a posiciones autoritarias.
- La Convención Americana no prohíbe la pena de muerte, lo que prohíbe es la aplicación en mujeres embarazadas, para delitos políticos o conexos con los políticos y la extensión de la pena de muerte a tipos penales nuevos posteriores al momento que se ratifica la Convención
- El tema de la justicia y la reconciliación es necesario en nuestras sociedades, sin embargo las Cortes actuales tienen limitación para resolver los casos por lo que es importante establecer parámetros de cómo enfrentar las situaciones que repentinamente se presentan.
- La lucha por la verdad y la justicia es fundamental. Puede haber reconciliación pero solamente después de que se sepa la verdad y que se cumplan con todos los pasos.
- La Comisión tiene posiciones de promoción y protección. Las leyes de la promoción son de acercamiento a los Estados. La protección tiene otras leyes que son las de la imparcialidad, de la investigación a fondo y de respetar los derechos de los peticionarios. Ambas funciones, deben de cumplirse teniendo en cuenta la distinción entre una y otra.
- En las constituciones, cuando el lenguaje no es claro, depende de la interpretación que en los mismos tribunales del país le dan. En este sentido resulta importante la discusión acerca de la jerarquía de los tratados de derechos humanos con respecto a las legislaciones internas.
- Las sentencias de la Corte son obligatorias pero carecen de mecanismos para hacer posible esta obligatoriedad.
- Las decisiones de la Comisión no son obligatorias pero las de la Corte sí. Según la Convención Americana el mecanismo de cumplimiento es el Informe Anual que tanto la Comisión como la Corte, presentan a la Asamblea General.
- El movimiento de derechos humanos hace 10 años o más, trazaba una línea completamente clara entre las violaciones cometidas por los insurgentes y las violaciones cometidas por el gobierno. Por lo tanto, al hablar del derecho a la guerra, podían criticar solamente al Estado.
- Actualmente a los grupos insurgentes les aplican las normas del Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra del 49 o, la del Protocolo II si es que el Estado la ha ratificado.

